

# El mentidero de la Villa de Madrid



Nº 682 – Lunes 3 de octubre de 2022

## Se comenta en los mentideros madrileños...

- ✚ **Recaudar más o recaudar menos, ¡he ahí la cuestión!**, *Emilio Álvarez Frías*
- ✚ **La venda de la diosa**, *Juan Van-Halen*
- ✚ **La hora de Andalucía ¡por fin!**, *Jesús Cacho*
- ✚ **El okupa Pedro Sánchez**, *Ángel Nieto*
- ✚ **Sánchez, «il piccolo» Berlusconi**, *Agustín Valladolid*
- ✚ **El comisario europeo de Justicia advierte al Gobierno que «lo ideal» es que los jueces elijan ya al nuevo CGPJ**, *María Jamaro*

## Recaudar más o recaudar menos, ¡he ahí la cuestión!

**Emilio Álvarez Frías**

Esto de saber que recaudando menos se consigue a la larga más, parece un truco, que no se creen los socialistas, pero que resulta verdad si se estudia a quienes han practicado uno u otro procedimiento de sacar los dineros a los asentados en uno u otro lugar donde han practicado esa especie de travesura. Nada de travesura ¡qué va! Es una cosa muy seria. Los más avisados economistas están convencidos de ello y lo practican donde pueden y tienen medios para hacerlo.

Los que juegan a la economía dentro de la política, como son avarientos, en su corta y ávida visión, solo ven que si hay una posibilidad de sacas fácilmente más dinero de golpe conseguirán llenar tus arcas más rápidamente. Creen que el usurero hace algo parecido para conseguir colmar los sacos de onzas o euros, que para el caso es lo mismo, y se equivocan totalmente. Son unos necios. Tienen la mente muy cerrada, son incapaces de pensar para encontrar lo mejor, y no se dan cuenta de que si ellos procuran esquilmar lo menos posible los monederos de la mayoría con sus de recursos escasos podrán comprar más repartiendo el gasto, y si a los que disponen de peculios más generosos los podrán invertir en los negocios o las industrias con lo que crearán puestos de trabajo y surgirán nuevos monederos que podrán comprar en más sitios y dar de comer a más gente que ahora vive gracias a la generosidad de sus conciudadanos y no por efector del hacer de los políticos.

De esto hablaban hoy los contertulios habituales del bar conocido como «jardín de invierno» del hotel Palace –auténtico mentidero de la Villa de Madrid desde que abrieron sus puertas– una vez que cerraba la Bolsa y hacían componendas de cómo les había ido a sus inversiones, pensando si habían de quitar de aquí para poner allí, o viceversa. Esta mentidero siempre ha tenido contertulios, ya sean más ya menos, pues incluso durante la Guerra Civil allí se encontraban los periodistas extranjeros, mezclándose con los gerifaltes del país que no se asomaban por los frentes de guerra pero les suministraban información de cómo iban ganando batallas los rojos, y les servía para escribir cómodamente las crónicas que enviaban a sus periódicos como si las redactaran en los propios frentes de combate, incluso quizá también parte de sus novelas sobre el tema, tal como hacía el americano Ernest Hemingway, que era más periodista de guerra desde las barras de los bares, arribado al whisky, que de las trincheras donde tenían lugar las batallas.

Y para engañar a la crédula población, Pedro Sánchez se ha lanzado a mover los impuestos, castigando a «los ricos» con una cuota especial, beneficiar a «los pobres» liberándolos del impuesto de IRPF (que es como tomarlos el pelo, pues apenas había declarantes en los topes marcados al efecto, olvidando a las clases medias que son la mayoría de cotizantes del citado im-



puesto que están acogotadas con las hipotecas, los gastos de colegio de los niños, la compra para alimentar a toda la familia, la subida del gas y de la luz, etc.

Esto es lo que se escucha a los tranquilos tertulianos del mentidero del «jardín de invierno» mientras degustan la bebida preparada sabiamente por el barman que los atiende con delicadeza y con el oído puesto para saber que instrucciones dar a su agente con el fin de que mueva sus pequeñas inversiones que van creciendo poco a poco gracias a la información de estos águilas de la Bolsa.

Por lo bajini nos llega la noticia de que sobre este tema también se va a hablar en el mentidero de Huertas por lo que, discretamente, liquidamos nuestra cuenta y dando un paseo nos acercamos al susodicho mentidero.

---

## La venda de la diosa

La Justicia ha perdido credibilidad. La Generalidad incumple las sentencias del Supremo, el Gobierno lo asume como normal y no pasa nada

**Juan Van-Halen** (*El Debate*)

Escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando

**L**a alegoría de la Justicia es la diosa de ojos vendados, balanza en una mano y espada en la otra. Últimamente estamos a vueltas con ella. Los dos partidos mayoritarios se culpan de impedir la renovación del CGPJ. Uno acusa al otro de no acatar la Constitución y el otro denuncia que el contrario no busca el diálogo sino un sí bwana. Con la evidente vocación

okupa del Gobierno las reservas de la oposición no parecen ilusorias. El todavía presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, urgió a ambas formaciones a ponerse de acuerdo en ocasión solemne y ante el Rey. Pero el asunto tiene muchos esquinazos.

La credibilidad de la Justicia está dañada sobre todo por dos lacras que afectan a los ciudadanos que las sufren. De un lado su lentitud. Desde cualquier juzgado de ámbito menor demorándose los procedimientos, al Tribunal Constitucional, que lleva años y años con importantes asuntos pendientes. Y, de otro lado, las sospechas de su falta de independencia respecto a otros poderes y, concretamente, al Gobierno y sus afines. El caso no es generalizado, pero cuenta con ejemplos que saltan a los medios con desagradable pertinacia.

Se asume que la lentitud se debe a falta de medios y el Gobierno es responsable, salvo en los asuntos aparcados en el Constitucional que cuenta con medios suficientes o así se entiende. Hay que pensar que habrá otros motivos. En cuanto a la independencia, está claro que los jueces son humanos y tienen sus opiniones, y aunque creo que un juez deja sus ideas políticas en el perchero cuando imparte justicia, todos conocemos casos en que no ha sido ni es así. Obviamente circulan nombres de jueces no independientes pero me alejo de rumorologías. En nuestra historia reciente se produjo una moción de censura en la que se utilizó reiteradamente como motivo una sentencia matizada por un juez que luego el Tribunal Supremo desmintió. Aquel juez fue el escollo inicial para que PSOE y PP llegasen a un acuerdo sobre las renovaciones pendientes. Su nombre ha aparecido profusamente en los medios: José Ricardo



de Prada, que parece iría al Constitucional entre los candidatos de confianza gubernamental. Vuelta a la casilla de salida.

Lesmes tenía razón al urgir a los partidos la renovación del órgano que preside, pero él, que es un veterano magistrado, no ignora que el quid de la cuestión es la intención del Gobierno de conseguir un CGPJ y un Constitucional digamos que «amables». Parece que uno de los candidatos a presidir el Constitucional es Conde Pumpido que, siendo fiscal general del Estado, afirmó: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». La suspicacia de la oposición emana de la sospecha, a veces constancia, de la falta de independencia de los nombres propuestos. Los partidos deben ponerse de acuerdo pero ello, como el matrimonio, es cosa de dos, no un trágala.

Al día siguiente del enfado de Lesmes, Bolaños recibía la llamada del partido mayoritario de la oposición para dialogar sobre candidatos y la respuesta fue una conminación, algún insulto, y de diálogo nada. La oposición trata de seguir las recomendaciones de la UE, cambiando el sistema –que se reformó en 1985, mayoría absoluta del PSOE– de modo que los propios jueces elijan a sus

vocales del Consejo. Pero eso no complació a quienes aspiran a ser beneficiarios absolutos de la renovación.

La Justicia atraviesa, además, otros desiertos. Hay un axioma repetido: los jueces hablan a través de sus sentencias. No deberían tener más opinión pública que la que emana de la ley que, por su alta función, han de aplicar. Pero –vanitas vanitatis– eso ha cambiado en este tiempo de personalidades rampantes, de jueces estrella y de nulo respeto a los secretos sumariales y, en general, a la custodia documental.

Jueces, fiscales, funcionarios, sabe Dios quiénes, desde sus cúpulas o desde más abajo, posibilitan que lleguen al ciudadano, muchas veces al detalle, los que deberían ser documentos confidenciales que atañen a instituciones y personas, no confirmados ni avalados por sentencias judiciales, cuyo conocimiento daña la honorabilidad personal o profesional de sus víctimas. Es lo que se conoce como «juicio mediático». La gente sentencia por lo que lee o ve en



las teles y el proceso judicial se convierte en un trámite molesto.

Esta gangrena en la honorabilidad del ciudadano, que atenta contra la presunción de inocencia, se da cada vez con más prodigalidad. Es un síntoma de perversión impresentable en un Estado de derecho. Órganos jurisdiccionales y cuerpos dignísimos que investigan hipotéticos delitos, filtran, no se sabe si por intereses inconfesables, expedientes, documentos o informes que deberían permanecer en el marco de la confidencialidad hasta que tengan efectos judiciales. Hemos apuntalado la presunción de culpabilidad.

La Justicia ha perdido credibilidad. La Generalidad incumple las sentencias del Supremo, el Gobierno lo asume como normal y no pasa nada. Y a menudo el ciudadano escucha de su abogado un inquietante: «A ver qué juez nos toca». Lesmes, próximo a dimitir o no, hizo bien exigiendo a los partidos pero debe escudriñar también su propio territorio. Las filtraciones no se investigan y las evidentes lesiones a la independencia, tampoco. La diosa debe conservar, al menos, la venda en los ojos. Con Lesmes o sin Lesmes, con renovaciones pendientes o sin ellas.

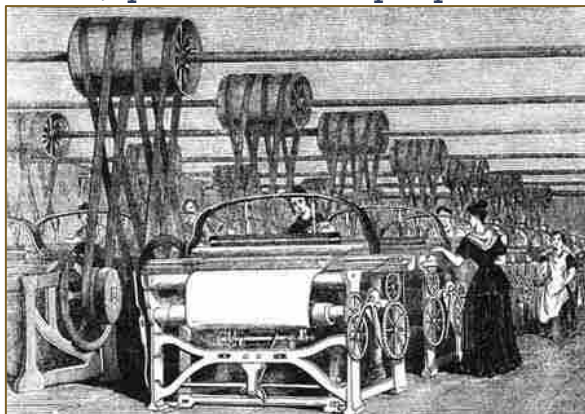
---

## La hora de Andalucía (¡por fin!)

Jesús Cacho (*Vozpópuli*)

**F**ue Felipe González quien, en cierta ocasión, contó los pormenores de una conversación por él mantenida con el sueco Olof Palme, el portugués Mario Soares y el francés François Mitterrand, todos notorios líderes de los partidos socialistas de sus respectivos países. De acuerdo con la versión del español, el socialista portugués, entonces muy de moda por la Revolución de los Claveles (25 de abril de 1974), estaba contando a los reunidos

sus planes para «acabar con los ricos» en Portugal y repartir la riqueza entre los pobres, momento en el que Palme tomó la palabra para reconvenirle en estos términos: «Mario, no te confundas, en Suecia lo que yo quiero es que todos sean ricos». El relato ha hecho fortuna y ha sido recreado, con sus variantes, en numerosas ocasiones, incluso con protagonistas distintos. Hay, por ejemplo, quien pone en boca del capitán Otelo Saraiva de Carvalho, gran protagonista de la Revolución portuguesa, la intención de los sublevados de «acabar con los ricos», alterando ligeramente la lacónica respuesta del sueco con un «vaya, lo que nosotros queremos es acabar con los pobres». La anécdota, ciertamente muy conocida, viene a cuento como perfecta ilustración de lo acontecido esta semana en España con motivo de la decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de prescindir del Impuesto sobre el Patrimonio y deflactar tres tramos del IRPF en su Comunidad, y de la respuesta, salida de madre, que ha merecido por parte del Gobierno Sánchez y sus ministrines.



La decisión de Moreno ha hecho auténtica pupa en la «nomenklatura» socialista, como sus altavoces mediáticos se han encargado de reflejar, seguramente porque ha venido a validar la política de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su impenitente guerra fiscal contra el Gobierno Sánchez. ¡Qué cabreo, señor mío! Parece fuera de duda: a Sánchez y su claqué les gusta es-

quilmar al prójimo, les encanta meter la mano en bolsillo ajeno, disfrutan saqueando al contribuyente. Se ponen enfermos cuando oyen hablar de bajar impuestos. Es algo que ocurre muchas décadas después del «sucedido» revelado por González, lo que evidencia no ya el estancamiento del PSOE en supuestos ideológicos que la socialdemocracia europea dejó hace mucho tiempo atrás, sino el palmario retroceso de quienes ahora detentan esas siglas, empantanados en postulados que son hoy sinónimo de caduco y retrógrado en materia de política económica y social. Casi 50 años después de la Revolución de los Claveles, el PSOE de Sánchez y sus mariachis sigue empeñado en «acabar con los ricos», no en terminar con los pobres, como quería Palme, mediante el crecimiento económico y la creación de empleo.

Mucha gente se ha retratado en este episodio. Es el caso del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha hablado de «recentralizar» competencias fiscales de las autonomías o, en otras palabras, de la conveniencia de quitar a las CC.AA la capacidad de bajar impuestos, por aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. El sujeto, que venía avalado por el cartel de profesional serio y solvente en sus tiempos, no tan lejanos, de responsable de la AIReF (el tipo, que presumía de su condición de «independiente» –gran éxito del PP con la selección de personal–, se quitó la careta en cuanto Sánchez le ofreció un ministerio), se ha demostrado como el perfecto sectario que seguramente exige la pertenencia a un Gobierno social comunista, sectario y

con misma facilidad que su jefe para decir digo donde dije Diego. Lo de Esquivá tiene especial delito, porque, al contrario que la mayoría de los miembros del Gabinete, gente con escasa idea de lo que se trae entre manos, intelectual y técnicamente no apta, él sí se sabe la asignatura, sí es plenamente consciente de las consecuencias a medio y largo plazo de las políticas adoptadas por este Ejecutivo.

A la cabeza del agitprop oficial se han situado, como cabía esperar, el diario *El País* (editorial titulado «Irresponsabilidad fiscal: La competencia tributaria a la baja entre las comunidades es ineficiente económicamente y debilita al Estado de bienestar», falso de toda falsedad), editado por una empresa quebrada desde hace más de una década, y a la que sostienen contra viento y marea Moncloa y el Ibex 35, y *La Vanguardia* (también editorial: «Andalucía se equivoca. Moreno Bonilla debe retractarse de su declaración de guerra fiscal a Cataluña»), esa noble gente tan preocupada por el uso del español en las aulas catalanas y tan pendiente de las subvenciones de la Generalidad, sin las que también tendría que echar el cierre. No hay noticia de que se opusieran a la decisión de Zapatero de eliminar el impuesto en 2008, que el propio ZP volvió a introducir, por exigencia del candidato Rubalcaba, a dos meses de las generales del 20-N de 2011, ya en plena crisis y en un intento tan desesperado como inútil de recuperar imagen. De donde se infiere que cuando el PSOE deroga el Impuesto sobre el Patrimonio, la medida es progresista, pero cuando lo hace el PP la cosa va de atraco a los pobres. Conviene recordar que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que mantuvo el impuesto, en otro más de los nunca bien ponderados «éxitos» del mastuerzo pontevedrés.



Rajoy el que mantuvo el impuesto, en otro más de los nunca bien ponderados «éxitos» del mastuerzo pontevedrés.

Un impuesto que apenas sigue en vigor en dos países europeos (Noruega y Suiza), que tiene un efecto recaudatorio mínimo (menos de 100 millones en Andalucía), pero un tremendo contenido simbólico, con una carga propagandística brutal para una paleoizquierda empeñada en perseguir la riqueza y acabar con el ahorro capaz de generar crecimiento y empleo. Ya lo dijo Mises: «Lo que empuja a las masas al campo socialista no es la ilusión de que el Socialismo las hará ricas, sino la expectativa de que pondrá freno a todos aquellos que son mejores que la masa misma». Ocurre que Juanma Moreno ha vendido mal la iniciativa o lo ha hecho de forma pintoresca (la apelación a los empresarios catalanes para que se instalen en Andalucía). Primero, un argumento de orden moral: hay que acabar con el impuesto por arcaico, antieconómico e injusto, en tanto en cuanto supone una doble imposición de carácter

francamente confiscatorio. Y otro de orden práctico: eliminarlo va a permitir con seguridad a las arcas andaluzas ingresar bastante más de lo que supuestamente pierde, porque su supresión estimula el ahorro, elimina obstáculos, alienta la toma de riesgos, introduce dinamismo en la economía, atrae inversión, crea nuevas empresas –incentiva el aumento de tamaño de las existentes– y procura nuevos puestos de trabajo. Ergo, la hacienda autonómica recaudará más por Propiedad, Seguridad Social, IRPF...

Un círculo virtuoso que puede colocar definitivamente a Andalucía a la cabeza del crecimiento económico español. Una oportunidad de oro para el definitivo despegue andaluz, que es probablemente lo que más preocupa al PSOE: la posibilidad de que la comunidad más poblada del país y la segunda en extensión deje de formar parte de una vez del tradicional ecosistema socialista basado en «el desempleo crónico y la sociedad dependiente de la Caja B de la Casa del Pueblo», como aquí escribía el jueves Carlos Martínez Gorriarán («El cuento del buen corrupto, un relato socialista»). Hora de romper las cadenas. Lo comprobó el propio Bonilla cuando constató que los 540 millones



que dejó de ingresar en las cinco rebajas fiscales efectuadas desde que está al frente de la Junta se transformaron en ingresos extras de 1.100 millones. También lo experimentó Macron cuando, en 2019, decidió acabar con el Impuesto Sobre las Fortunas (ISF) francés, que sustituyó por otro sobre bienes inmuebles. «No deben contarse mentiras», protestó recientemente el gallo. «Reintroducir el ISF no mejoraría la vida de un solo chaleco amarillo y volveríamos a poner en fuga a quienes se habían exiliado para dejar de pagarlo».

Muy cerca se encuentra Portugal, cuyo Gobierno, socialista para más señas, está dispuesto a recibir con los brazos abiertos al capital español «porque aquí no tenemos Impuesto sobre el Patrimonio». En plena pataleta, el Gobierno Sánchez ha reaccionado anunciando la introducción de un «impuesto a los ricos» idea en la que está ya empantanada ese prodigio de la matemática y del lenguaje que responde al nombre de María Jesús Montero («Pasarse en un Presupuesto es fácil, lo he dicho siempre, Chiqui, 1.200 millones, eso es poco, eso quitas o pones...»). Un impuesto con escaso poder recaudatorio convertido en un ejercicio de demagogia pura, que nunca veremos aprobado entre otras cosas porque, un suponer, el satrapilla que nos gobierna no estará en Moncloa en 2024. Y mientras tanto sigue el castigo a la economía por parte de un Gobierno especializado en meter la mano en el bolsillo a la gente; un Gobierno dedicado a la ocupación de las instituciones para su utilización en beneficio propio, empeñado en la colocación de amigos y conmitones en la miriada de empresas públicas (la única verdadera aspiración de estos mise-

rables cretinos es hacerse ricos), y ajeno al crecimiento de una deuda elefantíaca que hoy se yergue como la tormenta perfecta sobre el futuro del país. El martes supimos que la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en julio los 1,486 billones, a punto ya de rebasar la increíble frontera del billón y medio de euros, que ha crecido en el último año un 5% o 70.805 millones más.

«Si la guerra entre Rusia y Ucrania persiste, digamos que de dos a cuatro trimestres más, la crisis de deuda en la eurozona será inevitable. El detonante sería el elevado precio del gas y el petróleo, junto con el inexcusable deber del BCE de reconducir las altas cifras de inflación provocadas por el precio de estos productos y las expansivas políticas monetarias y fiscales del pasado reciente», escribía aquí esta semana José Luis Feito. Y no parece que Rusia vaya a abandonar Ucrania de la noche a la mañana. Una crisis que coge a la economía española muy castigada, con las defensas muy bajas consecuencia de toda una serie de decisiones políticas erróneas adoptadas por este Gobierno populista empeñado en subir impuestos y saquear las arcas públicas. El viernes conocimos que el Gobierno británico bajará impuestos por importe de 45.000 millones de libras para relanzar la economía, convencida la nueva primera ministra, Liz Truss, de que la única solución a los problemas que acogotan a la economía británica se llama «crecimiento». Una palabra que desconoce el gánápiro que nos gobierna, un tipo au-dessus de la mêlée que se ha ido a Nueva York a regalar el dinero del contribuyente («Sánchez se vende como actor global en EE.UU con 573 millones de euros públicos», rezaba ayer la apertura de *Vozpópuli*), con la vista puesta en trabajarse un puestecito en algún chiringuito de la progresía internacional para cuando, más pronto que tarde, los votantes españoles le den la patada en el culo. El daño que este personaje puede infligir a España durante el año y pico que resta hasta las generales va a ser, me temo, inconmensurable.

---

## El okupa Pedro Sánchez

«El nivel de chulería con que se están ocupando todas las instituciones sin ningún pudor sobrepasa cualquier límite razonable en una democracia»

**Álvaro Nieto** (*El Subjetivo*)

La operación a la que hemos asistido estos días para derribar al presidente de Radio Televisión Española (RTVE) provocaría un inmenso escándalo en cualquier país de nuestro entorno. Sin embargo, en España los cuatro años de Pedro Sánchez en La Moncloa, y su largo historial intentando controlar todas las instituciones del sistema, nos han vuelto completamente insensibles a una burda maniobra propia de un régimen de otras latitudes. Que un Gobierno cambie de un plumazo al presidente de la tele pública y aquí no arda Troya nos parece ya de lo más normal del mundo.

Sánchez ha vuelto a demostrar que es insaciable. No le basta con controlar el Gobierno de España y el Boletín Oficial del Estado. No le vale con orinarse



sistemáticamente en el Congreso de los Diputados y gobernar a golpe de decreto ley para esquivar la función del Parlamento. Tampoco le sirve tener colonizada la Fiscalía General del Estado e intentar asaltar, con leyes ad hoc incluidas, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional.

Ni siquiera le basta con tener a varios amiguetes jugando con dinero público en instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Renfe, Paradores, Aena, Red Eléctrica o Hispasat. Tampoco le ha valido con las dimisiones de los responsables del Instituto Nacional de Estadística, el Consejo de Seguridad Nuclear o de varios de los expertos independientes contratados para repensar el sistema fiscal.

Nada de eso ha sido suficiente. Ni tan siquiera la destitución de la jefa de los servicios secretos con tal de quedar bien con los independentistas catalanes.



Y, por supuesto, tampoco ha valido tener controladas empresas teóricamente privadas como Prisa o Indra.

Por no valerle, al Gobierno no le ha servido tener de su lado al presidente del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública ni controlar esa institución junto a Podemos y al Partido Nacio-

nalista Vasco. Porque, que nadie se engañe, el Ejecutivo ya controlaba RTVE gracias a que consiguió retorcer las normas del concurso público para acabar metiendo como consejeros, merced a un pacto con el Partido Popular, no a los candidatos más válidos, sino a los más fieles. Tornero, conviene no olvidarlo, no es un peligroso fascista: estaba ahí ocupando una de las plazas del PSOE.

### **Echado por ser poco sanchista**

Pero el problema de Tornero es que era poco sanchista. Porque Sánchez no quiere afines, quiere lacayos. Lacayos dispuestos a arrastrarse lo que sea menester con tal de llevar al amado líder hacia la victoria en las próximas elecciones. Y claro, que en la tele salieran algunos tertulianos del *Abc* para dar cierta apariencia de neutralidad le parecía intolerable. Moncloa desea periodistas que glosen sin titubeos las virtudes del Gobierno.

La operación de acoso y derribo a Tornero es una cacicada de proporciones gigantescas. Una demostración impúdica de quién manda en España. Sin escrúpulos, sin miramientos, sin vergüenza. La cosa ha sido tan asquerosa que hasta el periodista Aimar Bretos, conductor del programa nocturno de la Cadena Ser, nada sospechosa de ser crítica con el Gobierno, tuvo que sacar sus dientes cuando tanto Carmen Calvo como Pablo Iglesias se pusieron a defender en su tertulia que los políticos deben controlar lo que se emite en los medios de comunicación públicos.

Algunos periodistas españoles se han arrastrado tanto, se han vendido en tantas ocasiones, que ni Calvo ni Iglesias creen que pueda haber periodistas verdaderamente independientes en nuestro país. Y ese es el gran problema, que los políticos piensan que los periodistas son meros títeres y que los medios



solo pueden estar al servicio del poder.

Y no vale la excusa de que lo han hecho todos los gobiernos anteriormente. El nivel de chulería con que se están okupando todas las instituciones sobrepasa cualquier límite razonable. La victoria en las urnas no justifica el asalto a todo el sistema.

Una democracia tiene contrapesos y contrapoderes, y todos deberíamos ser conscientes de la importancia de preservarlos. Si queda algo de decencia en RTVE, sus profesionales deberían volver a vestir de negro los viernes, como hacen cuando gobierna el Partido Popular, para denunciar este asalto a mano armada en su empresa. De lo contrario, tendremos todo el derecho a pensar que están de acuerdo con ponerse al servicio del Ejecutivo más autoritario que se ha visto en España desde 1975.

---

## Sánchez, «il piccolo» Berlusconi

Sánchez no es dueño de ninguna televisión como Berlusconi, pero ya no disimula su intención de compensar esa carencia. La dimisión forzada del presidente de RTVE es también fruto de las presiones de Podemos

**Agustín Valladolid** (*Vozpópuli*)

**S**ilvio Berlusconi se aupó al poder sobre los escombros de una clase política desvergonzadamente extractiva que, durante décadas, convirtió a Italia en su finca particular. Como en 2013 dejó escrito el profesor Andrea Donofrio, en un trabajo para la Fundación Ortega-Marañón titulado «Berlusconi y la espectacularización de la política», «contra los partidos tradicionales y ante la crisis del Estado-nación, Berlusconi vampirizó literalmente el poder político, beneficiándose de la crisis de representatividad y de la apatía social generalizada». Dueño y señor de un monopolio televisivo privado construido gracias a sus privilegiadas relaciones con el poder (Canale 5, Rete 4 e Italia 1), Berlusconi fue, entre 1994 y 2011 el protagonista indiscutible de la política italiana, convirtiendo la democracia, en palabras de Donofrio, en «un simulacro, vaciándola de su contenido y sus atribuciones».

«El populismo mediático desecha los cauces institucionales para hacer de la televisión ágora y parlamento, vocero y caja de resonancia en la relación del gobernante con la sociedad. Trabado con la pantalla, el telespectador se conecta con la realidad política a través de los mensajes audiovisuales. Si la fuente de tales contenidos es una sola, o si su pluralidad resulta escasa, la información política que los ciudadanos reciban será elemental y unilateral»

(Medioacracia: «Populismo mediático, Berlusconi y el poder de la televisión»).

El catecismo de Il Cavaliere. Berlusconi mostró con mayor claridad el camino: si se controlan los medios, cualquiera puede hacerse con el poder. La televisión, los medios en general, principal campo de batalla político. El dominio de los medios, médula de la estrategia partidaria, y el Parlamento convertido en un plató más del espectáculo.

«Esto lo lleva Bolaños. Órdenes del jefe». Confesión de parte de un alto cargo del Gobierno. En efecto, solo hay que preguntar. Arrancaba la semana y el ministro de la Presidencia recibía en Moncloa a las dos consejeras de RTVE elegidas a propuesta del PSOE, Elena Sánchez (nueva presidenta interina y contrastada profesional metida en camisa de once varas) y Concepción Cascajosa. El secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, hacía lo propio con Ramón Colom. Diurnidad (sic) y alevosía. ¿Para qué disimular? El lunes había dimitido el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, elegido en marzo de 2021 tras el acuerdo alcanzado, aleluya, por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV. Pero el momento de la lírica ya es agua pasada.



Afrontamos un decisivo período electoral y no hay lugar para las medias tintas. O conmigo o contra mí. A Tornero se lo han llevado por delante porque seguía empeñado en buscar consensos. Grave error de cálculo en estos tiempos.

Cierto que, como aquí ha contado Rubén Arranz, la gestión del catedrático de la Universidad Autónoma de

Barcelona distaba mucho de ser excelente. Pero no estamos hablando de eso. Hablamos de esa vocación confiscatoria e instrumental de los partidos cuando de RTVE y otros organismos públicos se trata. Hablamos de una institución que con cada vuelta de tuerca a la que los partidos la someten pierde un grado más de crédito social. Hablamos de la creciente fragilidad de un medio público que, allá donde existe, suele ser un medidor fiable de la buena o mala salud de la democracia. Hablamos del penoso papel secundario al que el Gobierno condena al Parlamento (¿nada que decir, señora Batet?). De eso hablamos; de que RTVE es solo el último ejemplo del descarado acoso al que los contrapesos indispensables en un sistema democrático que se respete a sí mismo vienen siendo sometidos, con alarmante frecuencia, por el poder político.

A Tornero no le ha echado el Parlamento; le han echado Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente de RTVE se rodeó de un grupo de fieles, demasiados, al-

gunos vinculados al socialismo catalán. Inútiles por innecesarios, pero moderados y sensatos. Algo inadmisibles para Unidas Podemos. Para los nostálgicos del NODO, el entourage de Tornero era algo así como la izquierda blandengue, que diría Irene Montero. En los últimos meses, no había negociación entre el gobierno A y el B en la que el podemismo no tirara a la cara de sus interlocutores socialistas la nómina de tertulianos con asiento en TVE y pidiera sin complejos el relevo del presidente de la Corporación. Daba igual que se tratara de la ley del «sí es sí» o de los presupuestos. «¡Para ti la Consejería de Turismo! ¡Dame a mí los telediarios!» (Pablo Iglesias).

Podemos se la tenía jurada a Tornero desde que éste sacó de la parrilla el programa de Jesús Cintora. Se dieron por aludidos. Les habían tocado donde más duele, en la cuota. Se sintieron expropiados, expulsados de un territorio que a todos los efectos ya consideraban propio. Ahora, con la salida forzada de Tornero, lo que corresponde es recuperar el terreno perdido, negociar un nuevo reparto. El PSOE cederá, ya veremos en dónde y en qué, porque ya tiene a sus peones bien instalados en Torrespaña. Y eso no se toca. Lo interesante será ver cómo prorrataan su cupo Ione y Yolanda. Seguro que Pedro Sánchez asiste divertido a la refriega. Desde lejos, porque el gran líder, asegurado el control de lo importante («Dame a mí los telediarios»), no está para minucias, sino para terminar el trabajo y cerrar el círculo, asegurando la «comprensión» de las privadas vía fondos europeos, entre otros caramelos, y cobrándose los favores hechos a los grupos editoriales «amigos».

Sánchez no es el dueño de ninguna televisión privada. No es Berlusconi. Pero, como Berlusconi, no va a dudar en usar el poder de sugestión de los medios para limitar los daños derivados de su acelerado desgaste. Y la televisión pública, ante el estruendoso silencio de periodistas insignes y asociaciones profesionales, va a ser inexorablemente una víctima más de ese designio presidencial. No, Sánchez no es dueño de ninguna televisión, pero ya no disimula su intención de compensar esa carencia. Alegará legítima defensa –ya saben, lo de las terminales mediáticas de los poderosos–, pero no cejará hasta poner RTVE a su servicio. «Il piccolo Berlusconi».

### **La postdata: Umberto Eco y el populismo mediático**

«Ese es el tipo de régimen de populismo mediático que Berlusconi está instaurando, en el que se establece una relación directa entre el jefe máximo y el pueblo a través de los medios de comunicación de masas, con la consiguiente desautorización del Parlamento (...). No podemos evitar pensar que la democracia romana comenzó a morir cuando sus políticos comprendieron



que no hacía falta tomar en serio sus programas, sino que bastaba simplemente con caer simpáticos a sus, cómo diría, telespectadores» (Umberto Eco. *Manuale del candidato-Istruzioni per vincere le elezioni*. 2007).

---

## El comisario europeo de Justicia advierte al Gobierno que «lo ideal» es que los jueces elijan ya al nuevo CGPJ

El belga Didier Reynders viajará hoy a España con una posición muy clara y la misión de poner fin a la crisis institucional que afecta a nuestro país

**María Jamardo** (*El Debate*)

El comisario de Justicia, Didier Reynders, tiene la compleja labor de pacificar la guerra desatada, desde el pasado mes de marzo, en el Poder Judicial español. El belga, que hoy llegará a nuestro país para mantener una ronda de contactos con varios de los actores directamente implicados en la crisis institucional, ha sido tajante sobre su posición, horas antes de emprender viaje. «Lo ideal» a ojos de Bruselas es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea decidida en su mayoría por los propios jueces, tal y como recomiendan los estándares europeos, sin esperar a que se lleve a cabo una reforma más profunda en el sistema de selección actual.

«El objetivo es ver cómo ayudar a través de ese diálogo a poner en marcha las recomendaciones. Por supuesto, lo ideal no es sólo tener una reforma que para el futuro respete las recomendaciones sobre el CGPJ que vienen de la Comisión. Lo ideal es que esta orientación se encontrara ya en la designación de los miembros ahora», ha explicado



Reynders a la prensa en Bruselas, esta misma mañana.

Así las cosas, el emisario europeo ha recalcado que durante estos dos próximos días, durante su estancia en Madrid, confía en lograr avances por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta la fecha ha rechazado la posibilidad de entregar a los jueces la potestad de designar a sus representantes, así como recabar información sensible de los responsables institucionales y de las fuerzas políticas de oposición, asociaciones de jueces y la sociedad civil.

La ronda de contactos será muy amplia. Reynders mantendrá conversaciones con un total de 5 ministros del Ejecutivo socialista –el de Presidencia, Félix Bolaños; la titular de Justicia, Pilar Llop; la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y, su homólogo de Consumo, Alberto Garzón–. Además, tendrá la ocasión de entrevistarse con el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, cuya dimisión es cuestión de días si no hay acuerdo; el del Constitucional, Pedro

González-Trevijano; y, el recién estrenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

También estarán en su agenda dos de las principales entidades profesionales: la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). El comisario intervendrá, este jueves, en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados.

### Malestar en el Ejecutivo

Consultado por el posible malestar en el Ejecutivo por sus contactos previos con miembros del Partido Popular –entre ellos el vicesecretario institucional e interlocutor de los populares en materia judicial, Esteban González Pons– Reynders ha zanjado el asunto afirmando que ha tenido «numerosos contactos con miembros del Gobierno» como preparación al viaje en ciernes. En especial, con la ministra de Justicia, Pilar Llop, con la que mantuvo un encuentro informal, el pasado mes de junio en el marco de unos cursos de verano.

Ya en aquella ocasión, como avanzó *El Debate*, el comisario europeo dejó clara su premisa de que son los jueces deben elegir a sus representantes. No en vano, España arrastra una deuda histórica de incumplimiento sobre uno de



los principales postulados del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en la materia: asegurar un método de representación en el que «las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de origen judicial». De persistir el incumplimiento «sistemático» de nuestro país en las recomendaciones comunitarias orientadas a la

mayor independencia de la Justicia, Bruselas podría tomar medidas más duras más allá de las habituales advertencias.

En Bruselas son plenamente conscientes de que la situación de prórroga que vive el Poder Judicial en nuestro país es ya «inasumible». La parálisis en los nombramientos de los jueces que afectan a vacantes en todos los órganos jurisdiccionales, empezando por un Supremo laminado y hasta llegar a las Audiencias Provinciales –consecuencia de la prórroga del Consejo– tiene que desatascarse. El belga Didier Reynders regresa a España tras su última visita no oficial, el pasado mes de junio, con el firme propósito de desencallar la situación.